

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1095

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos

LEY

Para establecer la Ley de Procedimiento Adjudicativo Municipal a los fines de disponer guías claras para la revisión de determinaciones administrativas de índole contributiva emitidas por los municipios de Puerto Rico, y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Asamblea Legislativa tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la modernización y optimización de los procesos gubernamentales. Uno de los pilares fundamentales de toda democracia es el derecho de los ciudadanos a cuestionar las actuaciones del Estado ante un foro imparcial, derecho conocido como el debido proceso de ley y consagrado tanto en la Constitución de los Estados Unidos de América como en la Constitución del Gobierno de Puerto Rico.

Conscientes de que el acceso a los tribunales puede resultar oneroso y prolongado para muchos ciudadanos, el 30 de junio de 2017 se promulgó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley 38-2017), que ha garantizado, —en la gran mayoría de las agencias del Gobierno— la existencia de un procedimiento administrativo rápido, justo, económico y uniforme para la revisión de determinaciones administrativas.

No obstante, dicha ley excluyó expresamente a los municipios en lo que respecta a las determinaciones de naturaleza contributiva. En la actualidad, las revisiones administrativas de estas determinaciones se realizan, en la mayoría de los casos, por los mismos funcionarios o dependencias municipales que las emitieron originalmente, sin que exista un procedimiento uniforme ni reglas claras y comunes aplicables a todos los municipios. Esta práctica, basada principalmente en usos y costumbres locales, genera incongruencias en la interpretación de la ley entre los setenta y ocho (78) municipios, inseguridad jurídica y posibles vulneraciones al debido proceso de ley.

Por tal razón, se hace necesario y urgente centralizar en el Departamento de Hacienda la función de revisión administrativa de las determinaciones contributivas municipales, mediante la creación de una Oficina de Revisiones Contributivas Municipales, adscrita a dicha agencia, la cual ya cuenta con los recursos, la infraestructura y la experiencia técnica necesarias. No obstante, los abogados que se asignen a dicha oficina serán nombrados por los alcaldes, con el fin de preservar la autonomía municipal, evitando así que la Rama Ejecutiva tenga algún grado de injerencia en la toma de decisiones.

Esta Ley garantizará uniformidad, imparcialidad, celeridad y economía procesal, al tiempo que fortalecerá la confianza de los contribuyentes en el sistema y contribuirá al objetivo mayor de una administración pública más eficiente y transparente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. – Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley de Procedimiento Adjudicativo
3 Municipal”.

4 Artículo 2. – Definiciones.

5 (a) Adjudicación – El pronunciamiento mediante el cual la Oficina determina los
6 derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte.

1 (b) Alcalde - el Primer Ejecutivo del gobierno municipal.

2 (c) Deficiencia - El monto por el cual los arbitrios de construcción o la patente
3 municipal impuesta bajo la Ley 107-2020, según enmendada, sobrepase el
4 exceso de: -

5 (1) la suma de (A) la cantidad declarada como contribución por el
6 contribuyente en su declaración si se rindió una, más (B) las cantidades
7 previamente tasadas, o cobradas sin tasación, como deficiencia, sobre -

8 (1) el monto de aquella parte de una reducción, crédito, reintegro u otro
9 reembolso, que se hizo por razón de que los arbitrios de construcción o
10 la patente municipal impuesta bajo la Ley 107-2020, según enmendada,
11 era menor que el exceso de la cantidad especificada en el apartado (c)(1)
12 sobre el monto de reducciones previamente hechas.

13 (d) Interventor - Aquella persona que no sea parte original en cualquier
14 procedimiento adjudicativo y que haya demostrado su capacidad o interés en
15 el procedimiento.

16 (e) Ley 107-2020 - Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, según enmendada,
17 conocida como el Código Municipal de Puerto Rico.

18 (f) Oficina - Se refiere a la Oficina de Revisiones Contributivas Municipales.

19 (g) Orden o Resolución - Cualquier decisión o acción municipal de aplicación
20 particular que adjudique derechos u obligaciones contributivas relacionadas a
21 la patente municipal o arbitrios de construcción de una o más personas
22 específicas, o que imponga penalidades o sanciones.

(h) Orden Interlocutoria – Aquella acción en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal.

(i) Persona – Toda persona natural o jurídica que no sea un Municipio.

(j) Parte – Toda persona o Municipio autorizado por ley a quien se dirija específicamente la acción de la Oficina o que sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o participar en la misma, o que haya radicado una petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte en dicho procedimiento.

Artículo 3. – Creación de la Oficina.

(a) Se crea la Oficina de Revisiones Contributivas Municipales, la cual quedará adscrita al Departamento de Hacienda y operará bajo su dirección y supervisión administrativa.

(b) Los abogados-revisores que integren la plantilla de la Oficina serán nombrados por el Secretario de Hacienda, previa recomendación y propuesta vinculante de la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (“CRIM”). Dichos abogados deberán cumplir con los requisitos de idoneidad, experiencia en materia contributiva y cualquier otro requisito que establezca la Junta del CRIM.

(c) Cuando ocurra una demora en la resolución de los casos que exceda seis (6) meses, y la misma sea atribuible, total o parcialmente, a la insuficiencia del personal asignado a dicha Oficina, el Secretario de Hacienda deberá notificar de inmediato y por escrito a la Junta de Directores del Centro de Recaudación

de Ingresos Municipales sobre dicha circunstancia, indicando el número de plazas adicionales requeridas, así como la justificación técnica correspondiente, a los fines de que dicha Junta proceda, con carácter de urgencia, a autorizar y gestionar la recomendación y propuesta vinculante de personal necesaria para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en esta Ley. Dicha notificación deberá acompañarse de un plan de acción correctiva y de un informe trimestral de seguimiento, hasta tanto se subsane la deficiencia de personal identificada.

(d) La Oficina garantizará la uniformidad de criterios, la imparcialidad en las decisiones y la celeridad en los procedimientos, de conformidad con los principios de economía procesal y de confianza legítima de los contribuyentes.

(e) La Oficina tendrá a su cargo, de manera exclusiva y centralizada, la jurisdicción para atender todos los procedimientos adjudicativos radicados por los contribuyentes, en o después del 1 de enero de 2027, ante todos los municipios, para impugnar deficiencias relacionadas con arbitrios de construcción o con la patente municipal impuesta al amparo de la Ley 107-2020, según enmendada.

(f) Queda expresamente prohibido al Secretario de Hacienda, a sus subalternos y a cualquier funcionario o empleado del Departamento de Hacienda intervenir, influir, revisar, modificar, aprobar o desaprobado, directa o indirectamente, cualquiera de las decisiones o determinaciones que emita la Oficina en el ejercicio de sus funciones. La única función del Secretario de Hacienda y del

Departamento de Hacienda será proveer la infraestructura física, el personal administrativo de apoyo, los sistemas tecnológicos y los recursos presupuestarios necesarios para la implementación y operación eficiente de esta Ley.

Artículo 4. – Derechos del Contribuyente

En todo procedimiento adjudicativo bajo esta Ley, la Oficina deberá salvaguardar los siguientes derechos:

- (a) Derecho a notificación oportuna de las deficiencias encontradas.
- (b) Derecho a presentar evidencia.
- (c) Derecho a una adjudicación imparcial.
- (d) Derecho a que la decisión se emita considerando únicamente el expediente administrativo.

Artículo 5.- Notificación Municipal

- (a) Cuando el Director de Finanzas del Municipio determine que existe una deficiencia, o adopte cualquier determinación administrativa de índole contributiva mediante orden o resolución, se notificará al contribuyente dicha deficiencia preliminar, orden o resolución por correo certificado.
- (b) Si el contribuyente no solicitare revisión ante la Oficina en la forma y dentro del término dispuesto en esta Ley, o si, habiéndola solicitado, se confirmare en todo o en parte la deficiencia, se deberá notificar por correo certificado al contribuyente su determinación final, indicando el monto de la deficiencia

original, así como los intereses y las penalidades, en los casos que corresponda.

Artículo 6. – Inicio del Proceso

(a) El proceso adjudicativo comenzará con la presentación de una solicitud de revisión por escrito ante la Oficina. La solicitud de revisión deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde la fecha de depósito en el correo de la notificación de la deficiencia, orden o resolución. Para determinar el período de treinta (30) días, los sábados, domingos y días feriados en Puerto Rico no se contarán como parte del trigésimo día.

(b) La revisión radicada deberá incluir la siguiente información:

- (1) Nombre y dirección del promovente;
- (2) Hechos constitutivos del reclamo;
- (3) Monto de la deficiencia, orden o resolución que se impugna;
- (4) Referencia a las disposiciones legales aplicables, si las conoce;
- (5) Remedio que solicita;
- (6) Firma de la persona promovente del procedimiento; y
- (7) Copia de la notificación de deficiencia.

Artículo 7.- Solicitud de Intervención en el Procedimiento Adjudicativo.

(a) Cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento adjudicativo ante la Oficina podrá someter una solicitud por escrito, debidamente fundamentada, para que se le permita intervenir o participar en dicho procedimiento. La

Oficina podrá conceder o denegar la solicitud, a su discreción, tomando en consideración, entre otros, los siguientes factores:

(1) Que el interés del peticionario pueda ser afectado adversamente por el procedimiento adjudicativo.

(2) Que no existan otros medios en derecho para que el peticionado pueda proteger adecuadamente su interés.

(3) Que el interés del peticionario ya esté representado adecuadamente por las partes en el procedimiento.

(4) Que la participación del peticionario pueda ayudar razonablemente a preparar un expediente más completo del procedimiento.

(5) Que la participación del peticionario pueda extender o dilatar excesivamente el procedimiento.

(6) Que el peticionario represente o sea portavoz de otros grupos o entidades de la comunidad.

(7) Que el peticionario pueda aportar información, pericia, conocimientos especializados o asesoramiento técnico que no estaría disponible de otro modo en el procedimiento.

(b) La Oficina deberá aplicar los criterios que anteceden de manera liberal, y podrá requerir que se le someta evidencia adicional para poder emitir la determinación correspondiente con respecto a la solicitud de intervención.

Artículo 8.- Denegatoria de Intervención.

1 Si la Oficina decide denegar una solicitud de intervención en un procedimiento
2 adjudicativo, notificará su determinación por escrito al peticionario, los fundamentos que
3 la sustentan y el recurso de revisión disponible.

4 Artículo 9.- Conferencia con Antelación a la Vista; Ordenes y Resoluciones
5 Sumarias.

6 (a) La Oficina podrá citar a todas las partes, a sus representantes autorizados o a
7 los interventores, ya sea por su propia iniciativa o a petición de una de las
8 partes, a una conferencia con antelación a la vista, con el propósito de lograr
9 un acuerdo definitivo o simplificar las cuestiones o la prueba a considerarse en
10 la vista. Se podrán aceptar estipulaciones, siempre que la Oficina determine
11 que ello sirve a los mejores intereses públicos.

12 (b) Si la Oficina determina, a solicitud de alguna de las partes y luego de analizar
13 los documentos que acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria, los
14 documentos incluidos con la moción en oposición, así como aquellos que obren
15 en el expediente, que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, podrá
16 dictar órdenes o resoluciones sumarias, ya sean de carácter final o parcial,
17 resolviendo cualquier controversia entre las partes que pueda ser separada de
18 otras controversias.

19 (c) La Oficina no podrá dictar ordenes o resoluciones sumarias en los casos en que
20 existen hechos materiales o esenciales controvertidos; haya alegaciones
21 afirmativas en la solicitud de revisión que no han sido refutadas; surge de los

1 propios documentos que se acompañan con la petición una controversia real
2 sobre algún hecho material y esencial; o como cuestión de derechos no procede.

3 Artículo 10.- Mecanismos de Descubrimiento de Prueba.

4 (a) Los procedimientos de descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los
5 casos de adjudicación ante la Oficina, a menos que el oficial examinador los
6 autorice previamente.

7 (b) La Oficina podrá emitir citaciones para la comparecencia de testigos; órdenes
8 para la producción de documentos, materiales u otros objetos, y órdenes
9 protectoras, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil.

10 (c) En caso incumplimiento de una orden o requerimiento emitido al amparo del
11 inciso (b) de esta Artículo, la Oficina podrá presentar una solicitud en auxilio
12 de su jurisdicción en la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia,
13 y éste podrá emitir una orden judicial en la que ordene el cumplimiento de la
14 persona en cuestión, bajo apercibimiento de que incurrirá en desacato si no
15 cumple con dicha orden.

16 Artículo 11.- Notificación de Vista.

17 (a) La Oficina notificará por escrito a todas las partes, a sus representantes
18 autorizados y a los interventores la fecha, hora y lugar en que se celebrará la
19 vista adjudicativa. La notificación deberá efectuarse por correo regular con no
20 menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de la vista, excepto que,
21 por justa causa consignada en la notificación, sea necesario acortar dicho
22 periodo, y deberá contener la siguiente información:

- 1 (1) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como la naturaleza y
2 propósito;
- 3 (2) Advertencia de que las partes podrán comparecer por derecho propio, o
4 asistidas de abogados. Las personas jurídicas comparecerán representadas
5 por abogados;
- 6 (3) Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la celebración de
7 la vista;
- 8 (4) Referencia a la deficiencia, orden o resolución, incluyendo años
9 contributivos o periodos en controversia;
- 10 (5) Apercibimiento de las medidas que la Oficina podrá tomar si una parte no
11 comparece a la vista; y
- 12 (6) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida, a menos que se
13 cumpla con las disposiciones del Artículo 14 de esta Ley.

14 Artículo 12.- Rebeldía.

15 Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia con antelación a la
16 vista, o a cualquier otra etapa durante el procedimiento adjudicativo, el funcionario que
17 presida la misma podrá declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin su
18 participación, pero notificará por escrito a dicha parte su determinación, los fundamentos
19 para la misma y recursos de revisión disponible.

20 Artículo 13.- Solicitud para Vista Pública.

21 Por la naturaleza de la información que se discute en los casos contributivos, la vista
22 adjudicativa será privada, a menos que se presente una solicitud por escrito, debidamente

1 fundamentada, para que la vista sea pública, y así lo autorice el funcionario que presida
2 la misma, siempre que entienda que hacerla pública no causará daño irreparable al
3 contribuyente.

4 Artículo 14.- Suspensión de Vistas Señaladas.

5 (a) El funcionario que presida el procedimiento adjudicativo no podrá suspender
6 una vista ya señalada, excepto que se solicite por escrito con expresión de las
7 causas que justifican dicha suspensión.

8 (b) Dicha solicitud será sometida con al menos tres (3) días de anticipación a la
9 fecha de la vista. La parte peticionaria deberá enviar copias de su solicitud a
10 las demás partes e interventores en el procedimiento, dentro del término
11 señalado para la solicitud de suspensión.

12 (c) Bajo ninguna circunstancia se podrá suspender una vista adjudicativa en más
13 de dos (2) ocasiones.

14 Artículo 15.- Procedimiento Durante la Vista.

15 (a) La vista deberá grabarse o estenografiarse, y el funcionario que presida la
16 misma emitirá la decisión por escrito.

17 (b) El funcionario que presida la vista, dentro de un marco de relativa
18 informalidad, ofrecerá a todas las partes la extensión necesaria para una
19 divulgación completa de todos los hechos y cuestiones en discusión, la
20 oportunidad de responder, presentar evidencia y argumentar, conducir
21 contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación, excepto cuando haya

1 sido restringida o limitada por las estipulaciones en la conferencia con
2 antelación a la vista.

3 (c) El funcionario que presida la vista podrá excluir aquella evidencia que sea
4 impertinente, inmaterial, repetitiva o inadmisible por fundamentos
5 constitucionales o legales basados en privilegios evidenciarios reconocidos
6 por los tribunales de Puerto Rico.

7 (d) El funcionario que presida la vista podrá tomar conocimiento oficial de todo
8 aquello que pueda ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de
9 justicia.

10 (e) Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas, pero
11 los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una
12 solución rápida, justa y económica del procedimiento.

13 (f) El funcionario que presida la vista podrá conceder a las partes un término de
14 quince (15) días después de concluir la misma para la presentación de
15 propuestas sobre determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Las
16 partes podrán voluntariamente renunciar a que se declaren las
17 determinaciones de hechos.

18 (g) Todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante la Oficina deberá
19 ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo
20 circunstancias excepcionales.

21 (h) En cualquier momento durante el proceso adjudicativo, el promovente, o su
22 representante autorizado podrá solicitar, mediante una moción acompañada

1 por un memorando de derecho, que la Oficina evalúe su caso y emita una
2 notificación final, sin que sea necesaria la celebración de la vista.

3 Artículo 16.- Determinaciones Finales de la Oficina e Impugnación Judicial.

4 (a) Una determinación final deberá ser emitida por escrito dentro de noventa (90)
5 días, contados a partir de que concluya la vista o de la presentación de las
6 propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a menos
7 que este término sea renunciado o ampliado mediante el consentimiento
8 escrito de todas las partes o por justa causa. La determinación final deberá
9 incluir, y exponer de forma separada, las determinaciones de hecho, si éstas
10 no han sido renunciadas, las conclusiones de derecho que fundamentan la
11 adjudicación y la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión,
12 según sea el caso. La determinación final deberá ser firmada por el oficial
13 examinador.

14 (b) La determinación final sobre una deficiencia deberá incluir el monto de la
15 deficiencia confirmada, ya sea la totalidad originalmente notificada o una
16 cantidad parcial, o, en su defecto, una declaración expresa de que la misma ha
17 sido dejada sin efecto. De confirmarse alguna cantidad de la deficiencia, la
18 notificación deberá incluir los intereses, recargos y penalidades aplicables al
19 momento de la notificación, más los que se acumulen durante un término
20 adicional de treinta (30) días.

21 (c) La determinación final advertirá el derecho de:

(1) En el caso de una deficiencia, advertirá al contribuyente de su derecho a recurrir dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación, ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha determinación, así como las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión y los términos correspondientes. Además, la determinación final deberá expresar el monto de la fianza que deberá prestar el contribuyente si deseara recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia contra la determinación de deficiencia. Dicha fianza no excederá del monto de los arbitrios de construcción o de la patente municipal, más los intereses sobre la deficiencia, computados por un período adicional de un (1) año a razón de un nueve por ciento (9%) anual. El contribuyente podrá pagar la parte de la deuda con la cual estuviere conforme y litigar el resto; en tal caso, la fianza no excederá del monto de la contribución que se litigue, más los intereses sobre la deficiencia computados conforme a lo aquí dispuesto.

(2) En el caso de una orden o resolución, se advertirá a la parte afectada de su derecho a recurrir, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación, ante el Tribunal de Apelaciones contra dicha determinación, así como las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión y los términos correspondientes.

- 1 (d) La Oficina deberá especificar en la certificación de sus determinaciones
2 finales los nombres y direcciones de las personas naturales o jurídicas a
3 quienes, en calidad de partes, les fue notificada la determinación, a los fines
4 de que estas puedan ejercer de forma efectiva el derecho a la revisión judicial
5 conferido por ley.
- 6 (e) La Oficina deberá notificar, mediante copia simple enviada por correo
7 certificado, a las partes y a sus abogados, de tenerlos, la orden o resolución
8 final a la brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o
9 resolución final y de la constancia de su notificación. Ninguna parte podrá
10 ser requerida a cumplir con una orden o resolución final, a menos que haya
11 sido debidamente notificada de la misma.
- 12 (f) En el caso de que una persona falleciere en o después de la fecha del depósito
13 en el correo de la notificación de la determinación final, pero antes de expirar
14 el término de treinta (30) días, el término que tendrán sus herederos o
15 representantes legales para prestar la fianza y/o recurrir ante el tribunal será
16 de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del depósito en el correo de
17 la notificación de la determinación final. Salvo que de otro modo se disponga
18 en esta Ley, tanto la prestación de la fianza aplicable como la radicación del
19 recurso ante el tribunal dentro del término aquí provisto constituirán
20 requisitos jurisdiccionales, sin cuyo cumplimiento el tribunal no podrá
21 conocer del asunto.

- 1 (g) La decisión final del oficial examinador en torno a una deficiencia, orden o
2 resolución no estará sujeta a revisión por ninguna otra oficina o ningún otro
3 funcionario del Municipio.
- 4 (h) La persona podrá radicar la demanda a que se refiere el apartado (c)(1) de
5 esta Sección en la sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al
6 municipio de su residencia, y no obstante cualesquiera otras disposiciones de
7 ley sobre traslado de causas o lugar de juicio, tendrá derecho, por razón de la
8 conveniencia de los testigos, a que su caso se litigue en dicha sala del Tribunal
9 de Primera Instancia.
- 10 (i) Las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia dictadas en los
11 méritos de una deficiencia podrán ser apeladas ante el foro apelativo con
12 jurisdicción para conocer de dicha apelación, de conformidad con lo
13 dispuesto en la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la
14 “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
15 debiendo interponerse dicha apelación en la forma y dentro del término
16 provisto por las reglas adoptadas para tales fines. En los casos en que la
17 sentencia del Tribunal de Primera Instancia determine la existencia de una
18 deficiencia, se ordenará la radicación de un cómputo de la contribución, y
19 dicha sentencia no se considerará final, por lo que el término apelativo no
20 comenzará a transcurrir para las partes hasta la fecha del archivo en autos de
21 la notificación a la persona y al Director de Finanzas de la resolución del

1 Tribunal de Primera Instancia que apruebe el cómputo de la contribución
2 determinada por dicho Tribunal.

- 3 (j) No se realizará la tasación con respecto a la patente municipal o al arbitrio de
4 construcción, ni se iniciará o tramitará procedimiento de apremio ni
5 procedimiento judicial alguno para su cobro, antes de que la notificación de
6 la determinación final haya sido enviada por correo certificado a la persona,
7 ni antes de que expire el término concedido por esta Ley al contribuyente
8 para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha
9 determinación final, ni, en caso de haberse recurrido ante el Tribunal de
10 Primera Instancia, hasta que la sentencia del Tribunal sea final y firme.

- 11 (k) Cuando una persona apelar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
12 que determine una deficiencia, estará obligada a pagar la totalidad de la
13 deficiencia así determinada dentro del término para apelar, y el
14 incumplimiento de dicho requisito de pago, salvo lo dispuesto en esta Ley,
15 privará al foro apelativo competente, de conformidad con la Ley Núm. 201-
16 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado
17 Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, de jurisdicción para conocer de la
18 apelación en sus méritos.

19 Si el foro apelativo resolviere que no existe la deficiencia determinada por el
20 Tribunal de Primera Instancia, total o parcialmente, y la persona hubiere pagado total
21 o parcialmente dicha deficiencia al apelar, el Director de Finanzas procederá a
22 reintegrarle, con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el municipio, la cantidad

1 correspondiente de conformidad con la sentencia del foro apelativo, más intereses a
2 razón de seis por ciento (6%) anual sobre el monto a reintegrarse, computados desde la
3 fecha del pago.

4 Si el Director de Finanzas apelare de la sentencia del Tribunal de Primera
5 Instancia que determine que no existe deficiencia en todo o en parte, o si, habiendo
6 apelado la persona, no hubiere pagado la totalidad de la contribución, en cualquiera de
7 dichos casos en que la sentencia del foro apelativo fuere favorable al Director de
8 Finanzas, la deficiencia determinada en apelación, o la parte de la misma no pagada,
9 será tasada y deberá pagarse mediante notificación y requerimiento del Director de
10 Finanzas.

11 (1) En el caso de que una persona apele la sentencia del Tribunal de Primera
12 Instancia que determine una deficiencia y no pueda cumplir con el requisito
13 del pago total de la deficiencia, o solo pueda pagar parte de la misma, el
14 Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar, siempre que la apelación
15 involucre una cuestión sustancial y con sujeción a lo dispuesto más adelante,
16 que la apelación continúe su curso hasta la resolución final en los méritos, sin
17 el pago total de dicha deficiencia. En tal caso, la persona deberá radicar junto
18 con su escrito de apelación ante el Tribunal de Primera Instancia una petición
19 fundada, exponiendo las razones por las cuales no puede pagar la deficiencia
20 en todo o en parte y los fundamentos que sustentan que la apelación involucra
21 una cuestión sustancial. Si el Tribunal de Primera Instancia determina que la
22 persona no puede pagar la deficiencia total o solo puede pagar parte de la

misma, y que la apelación involucre una cuestión sustancial, ordenará, en lugar del pago total, lo que corresponda según el caso:

(i) Que la apelación siga su curso bajo la fianza prestada para acudir al Tribunal de Primera Instancia si ésta fuere suficiente para responder de la deficiencia que en definitiva se determine y de sus intereses; o

(ii) que la persona preste una nueva fianza, a satisfacción del Tribunal, en cantidad suficiente para responder de la deficiencia y de sus intereses por un período razonable; o

(iii) que la persona pague parte de la deficiencia y la parte no pagada se afiance en cualquiera de las formas anteriormente provistas en los incisos

(i) y (ii). En el caso de una persona que hubiere sido exonerada de prestar fianza para litigar la deficiencia en el Tribunal de Primera Instancia y que demostrare que no puede pagar la contribución, ni prestar fianza, si la apelación envuelve una cuestión sustancial, el Tribunal de Primera Instancia dispondrá que la apelación siga su curso hasta la disposición final de la misma en los méritos sin requisito alguno de pago o de prestación de fianza.

(2) Si el Tribunal de Primera Instancia determina que la persona puede pagar la deficiencia, o parte de la misma, o que debe prestar una fianza, la persona deberá proceder al pago de la deficiencia o de la parte determinada, o a prestar la fianza dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha en que fuere notificada de la resolución del Tribunal de Primera Instancia a tales efectos, y

1 el pago de la deficiencia, o de la parte determinada, o la prestación de fianza
2 dentro de dicho término, perfeccionarán la apelación a todos los fines de ley.
3 Si dentro de dicho término de treinta (30) días la persona no efectuare el pago,
4 o no prestare la fianza requerida, o si habiendo prestado una fianza que no
5 fuere aceptada no prestare otra dentro del término que le concediere el
6 Tribunal de Primera Instancia, el foro apelativo no tendrá facultad para
7 conocer de la apelación en los méritos y será desestimada. Las resoluciones del
8 Tribunal de Primera Instancia dictadas bajo las disposiciones de los párrafos
9 (3) y (4) de este inciso no serán apelables, pero cualquier parte podrá, dentro
10 de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificada de cualquiera de
11 dichas resoluciones, solicitar revisión de la misma al foro apelativo que
12 corresponda de acuerdo a la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como
13 “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”,
14 mediante recurso de certiorari.

- 15 (l) El Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicción para redeterminar el monto
16 correcto de la deficiencia, aun cuando la cantidad así redeterminada sea mayor
17 que el monto de la deficiencia notificada por el Director de Finanzas, y para
18 determinar si deben imponerse cualesquiera cantidades adicionales o adiciones a
19 la contribución, siempre que el Director de Finanzas, o su representante, haya
20 establecido una reclamación a tales efectos en cualquier momento antes de dictarse
21 la sentencia.

1 (m) Si la Oficina hubiere enviado por correo a la persona la notificación de una
2 deficiencia y la persona hubiere recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia
3 dentro del término y en la forma provista por esta Ley, el Director de Finanzas no
4 tendrá derecho a determinar deficiencia adicional alguna con respecto al mismo
5 año contributivo, salvo en los casos de fraude y lo dispuesto en el inciso (c) del
6 Artículo 7.214.

7 Si la persona fuere notificada de que, debido a un error matemático, aparece en la
8 declaración una contribución adeudada en exceso de la expresada en la misma, y
9 que se ha hecho o se hará una tasación de la contribución basada en el monto
10 correcto que debió haberse declarado, tal notificación no será considerada, a los
11 fines de este apartado, como una notificación de deficiencia, y la persona no tendrá
12 derecho a radicar recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha
13 notificación. No obstante, el contribuyente conservará el derecho de revisión
14 judicial descrito en el apartado (c)(2) de esta Sección.

15 (n) En el caso de una deficiencia relacionada con una patente municipal, el Tribunal
16 de Primera Instancia, al considerar la deficiencia respecto a cualquier año
17 contributivo, tomará en cuenta los pagos realizados relacionados con patentes de
18 otros años contributivos, según sea necesario para determinar correctamente el
19 monto de dicha deficiencia; sin embargo, al hacerlo, no tendrá jurisdicción para
20 resolver si la patente correspondiente a cualquier otro año contributivo ha sido
21 pagada en exceso o en menor cuantía.

(o) En ausencia de notificación al Director de Finanzas o a la Oficina sobre la existencia de una relación fiduciaria, la notificación de una deficiencia respecto a una contribución será suficiente si ha sido enviada por correo a la persona a su última dirección conocida, aunque dicha persona haya fallecido o se encuentre legalmente incapacitada, o, en el caso de una corporación o sociedad, aunque ya no existan.

(p) En el caso de que la parte adversamente afectada por una determinación final de la Oficina sea un Municipio, este podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones, según corresponda, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación final de la Oficina o a partir de la fecha aplicable cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. Disponiéndose, que, si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se computará a partir de la fecha del depósito en el correo. En los casos en que un Municipio impugne una determinación relacionada a una deficiencia, el contribuyente no tendrá que prestar la Fianza descrita en el Artículo 17 de esta ley.

(q) Una orden o resolución interlocutoria de la Oficina no será revisable de manera directa. Dicha disposición interlocutoria podrá ser objeto de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la determinación final. La revisión judicial

prevista en esta Sección será el recurso exclusivo para impugnar los méritos de cualquier decisión, ya sea de naturaleza adjudicativa o de carácter informal emitida al amparo de esta Ley.

Artículo 17.- Fianza.

(a) La fianza destinada a garantizar el pago de contribuciones deberá presentarse mediante la radicación del formulario que indique la Oficina, acompañado de los documentos complementarios según el tipo de fianza a ser prestada. Toda radicación o prestación de fianza para garantizar el pago de la contribución se regirá por las reglas establecidas en este Artículo.

(b) Las fianzas permisibles son las siguientes:

(1) Pignoraticias:

(i) valores públicos (bonos del gobierno); y

(ii) depósitos en plica ("escrow accounts")

(2) Fianza de seguros - En caso de que la fianza prestada por el contribuyente sea de una compañía de seguros, se determinará si la misma está autorizada por el Comisionado de Seguros a hacer negocios en Puerto Rico, por medio de la solicitud de evidencia de certificación a dichos efectos.

(3) Hipotecarias - Las fianzas hipotecarias incluyen pagarés hipotecarios a nombre del Municipio, o hipotecas sobre propiedades inmuebles poseídas por el contribuyente, ofrecidas por éste como garantía, formalizadas en escritura pública.

(c) Si la persona no pudiere prestar la fianza por el monto requerido, o no pudiese prestar fianza, o si habiéndola prestado por el monto requerido el Director de Finanzas del Municipio la hubiere rechazado antes de radicarse la demanda, la persona podrá, no obstante, radicar su demanda en el Tribunal de Primera Instancia dentro del término anteriormente provisto, pero en tales casos deberá acompañar dicha demanda con una solicitud que será notificada al Director de Finanzas junto con la demanda, para que el Tribunal de Primera Instancia reduzca el monto de la fianza, o le exonere de prestarla, o apruebe la fianza prestada, según sea el caso, exponiendo las razones que tuviere para ello. Dentro de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificado de la solicitud de la persona sobre reducción, exoneración o aprobación de fianza, o dentro de cualquier prórroga que a tal fin le conceda el Tribunal, el Director de Finanzas deberá radicar en el Tribunal las objeciones que tuviere contra dicha solicitud de la persona, después de lo cual el Tribunal celebrará una audiencia y oír a las partes sin entrar en los méritos de la deficiencia notificada y dictará resolución, bien sosteniendo el monto de la fianza, reduciendo el mismo, bien exonerando a la persona de la prestación de la fianza, o bien aprobando la fianza que rechazó el Director de Finanzas u ordenando a la persona que preste otra.

(d) Si la persona hubiere prestado fianza por el monto requerido y antes de radicar su demanda dicha fianza no hubiere sido desaprobada, el Director de Finanzas tendrá un término de treinta (30) días a partir de la fecha en que fuere notificado de la demanda para radicar ante el Tribunal, con notificación a la persona, las

1 objeciones que tuviere contra la fianza así prestada, y si dichas objeciones no
2 fueren hechas dentro del término de treinta (30) días antes mencionado o de
3 cualquier prórroga que a tal fin le concede el Tribunal se entenderá que la fianza
4 ha sido aprobada por el Director de Finanzas. Si el Director de Finanzas objetare
5 dicha fianza, la persona deberá radicar su contestación a dichas objeciones dentro
6 de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificado de las mismas, o dentro
7 de cualquier prórroga que a tal fin le concede el Tribunal, después de lo cual el
8 Tribunal celebrará una audiencia y oirá a las partes sobre las objeciones a la fianza
9 sin entrar en los méritos de la deficiencia y dictará resolución bien sosteniendo la
10 fianza prestada por la persona o bien exigiéndole que preste otra en la forma y con
11 las garantías que el Tribunal determine.

12 (e) En todos los casos en que el Tribunal determine que la persona debe prestar una
13 fianza, la misma será sometida al Director de Finanzas para su aprobación dentro
14 de un término razonable fijado por el Tribunal de acuerdo con las circunstancias
15 de cada caso, que en ningún momento deberá exceder de sesenta (60) días a partir
16 de la fecha en que la resolución del Tribunal fijando dicha fianza sea firme y
17 ejecutoria. Si el Director de Finanzas no objetare la fianza así sometida dentro de
18 treinta (30) días o dentro de cualquier prórroga que a tal fin le conceda el Tribunal
19 se entenderá que la misma ha sido aprobada por él.

20 (f) Si la persona no acompañare la demanda con la solicitud requerida por el apartado
21 (c) para que se reduzca el monto de la fianza, o para que se le exonere de prestarla,
22 o para que se apruebe la fianza prestada; o dejare de contestar las objeciones del

1 Director de Finanzas a cualquier fianza hechas después de estar el caso ante el
2 Tribunal, o de comparecer a la vista en relación con cualquier fianza; o dejare de
3 prestar cualquier fianza requerida por el Tribunal dentro del término que se le
4 haya concedido; o no radicare su demanda en el Tribunal de Primera Instancia
5 dentro del término prescrito para ello; o de otro modo no prestare fianza dentro
6 de dicho término para recurrir ante el Tribunal; o dejare de cumplir con cualquiera
7 de los requisitos impuestos por este inciso para que el Tribunal de Primera
8 Instancia pueda conocer del asunto, será causa suficiente para que la demanda sea
9 archivada. En los casos en que la sentencia de archivo sea dictada por el
10 fundamento que la persona ha dejado de prestar cualquier fianza requerida por el
11 Tribunal en virtud de resolución para cuya revisión se concede aquí el recurso de
12 certiorari, dicha sentencia de archivo será final y firme.

13 (g) Las decisiones del Tribunal de Primera Instancia en los méritos sobre cualquier
14 incidente de fianza, así como sus decisiones conociendo o negándose a conocer un
15 asunto por alegado incumplimiento por parte de la persona de los requisitos
16 establecidos en este inciso para que el Tribunal pueda conocer del asunto, serán
17 inapelables, pero cualquier parte afectada podrá dentro de diez (10) días a partir
18 de la fecha en que fuere notificada de dicha decisión, solicitar revisión de la misma
19 por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari.

20 Artículo 18.- Tasaciones en Peligro, Quiebras y Sindicatura

21 Las disposiciones del Artículo 7.214 y 7.215 de la Ley 107-2020 deberán interpretarse
22 cónsono con las disposiciones de esta ley.

Artículo 19.-Reconsideración.

- (a) La parte adversamente afectada por una determinación final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la determinación, presentar una moción de reconsideración.
- (b) La Oficina, dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la determinación resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Tal determinación deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración.
- (c) Si la Oficina acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales.

- 1 (d) Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la determinación
2 es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se
3 calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.

4 Artículo 20.-Terminación del Procedimiento.

5 Si el Municipio decide no continuar con el procedimiento adjudicativo que
6 dispone esta ley en un caso en particular, terminará el procedimiento y notificará por
7 escrito por correo certificado con acuse de recibo a las partes su determinación.

8 Artículo 21.-Archivo de Expediente.

- 9 (a) La Oficina establecerá una unidad para el archivo de los expedientes de los
10 casos adjudicativos. La Oficina mantendrá un expediente de cada
11 procedimiento adjudicativo llevado a cabo de conformidad al procedimiento
12 establecido en esta Ley. El expediente incluirá, pero sin limitarse a:

- 13 (1) Las notificaciones de todos los procedimientos.
14 (2) Cualquier orden o resolución interlocutoria dictada antes de la vista.
15 (3) Cualquier moción, alegación, petición o requerimiento.
16 (4) Evidencia recibida o considerada.
17 (5) Una relación de todas las materias de las que se tomó conocimiento oficial.
18 (6) Ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones sobre las mismas.
19 (7) Propuestas de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,
20 órdenes solicitadas y excepciones.
21 (8) Cualquier orden o resolución final, preliminar o en reconsideración.

(b) El expediente de la Oficina constituirá la base exclusiva para su acción en un procedimiento adjudicativo bajo esta Ley y para la revisión judicial ulterior.

Artículo 22.-Sanciones.

(a) La Oficina podrá imponer sanciones, en su función cuasijudicial, en los siguientes casos:

(1) Si el promovente de una acción, o el promovido por ella, dejare de cumplir con las reglas o con cualquier orden del oficial examinador, la Oficina a iniciativa propia o a instancia de parte podrá ordenarle que muestre causa por la cual no deba imponérsele una sanción. La orden informará de las reglas u órdenes con las cuales no se haya cumplido, y se concederá un término de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de notificación de la orden, para la demostración de causa. De no cumplirse con esa orden, o de determinarse que no hubo causa que justifique el incumplimiento, entonces se podrá imponer una sanción económica a favor del Municipio o de cualquier parte, que no excederá de quinientos (500) dólares por cada imposición separada, a la parte o a su abogado, si este último es el responsable del incumplimiento.

(2) Ordenar la desestimación de la acción en el caso del promovente, o eliminar las alegaciones en el caso del promovido, si después de haber impuesto sanciones económicas y de haberlas notificado a la parte correspondiente, dicha parte continúa en su incumplimiento de las órdenes de la Oficina.

(3) Imponer costas y honorarios de abogados, en los mismos casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil, según enmendada.

Artículo 23.-Agotamiento de Remedios ante el Municipio; Relevó.

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios ante la Oficina o el Municipio provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios ante la Oficina o el Municipio por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción del Municipio, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia.

Artículo 24.-Solicitud de Revisión; Requisitos.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptará unas reglas para regular los procedimientos de revisión judicial, las que promoverán el acceso fácil, económico y efectivo a los ciudadanos, evitarán las desestimaciones del recurso de revisión por defectos de forma y de notificación y permitirán la comparecencia efectiva de recurrentes por derecho propio y en forma *pauperis*. A los fines de hacer efectiva la comparecencia por derecho propio y en forma *pauperis*, el Tribunal Supremo podrá adoptar procedimientos especiales y formularios simples.

Artículo 25.-Alcance de la Revisión Judicial.

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. Las determinaciones de hechos de las decisiones de los Municipios serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra

1 en el expediente. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por
2 el tribunal.

3 Artículo 26.-Remedios.

4 (a) La mera presentación de un recurso de revisión de una orden o resolución no
5 paralizará el trámite en el Municipio, a menos que la Oficina así lo determine.

6 (b) La Oficina podrá conceder el remedio solicitado o cualquier otro remedio que
7 considere apropiado, aunque no haya sido solicitado, y podrá conceder
8 honorarios razonables de abogados, costos y gastos a cualquier parte cuando
9 determine que la otra parte actuó de manera temeraria o de mala fe.

10 Artículo 27.-Revisión -Certiorari.

11 Cualquier parte adversamente afectada por la resolución del Tribunal de
12 Apelaciones de cualquier caso incoado bajo el apartado (c)(2) del Artículo 16 de esta ley
13 podrá solicitar la revisión de la misma mediante la presentación de recurso de Certiorari
14 ante el Tribunal Supremo en el término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo
15 en autos de la notificación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones o de la resolución
16 de éste resolviendo una moción de reconsideración debidamente presentada. Si la fecha
17 de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o resolución es distinta a la
18 del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha
19 del depósito en el correo.

20 Artículo 28.- Separabilidad.

21 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
22 disposición, Artículo, sub-artículo, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, Artículo, sub-artículo, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, Artículo, sub-artículo, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Artículo 29.- Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.